

'Sharía' casera en Santa Coloma

Un grupo de bangladesíes aplicó la ley islámica a un hombre que apaleó a una mujer ● Rob M. está en prisión por haber matado a otra amante en febrero

J. GARCÍA / R. CARRANCO
Barcelona

Seis hombres rodean a Rob M. en el salón de una casa en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Se han descalzado y esgrimen un zapato en la mano con el que golpean el cuerpo de Rob: la cabeza, el torso, las piernas. La víctima apenas resulta herida: los golpes son leves, y las suelas ni siquiera le han dejado marca. La agresión no busca un daño físico, sino moral: los seis hombres han decidido aplicar la ley islámica y castigar a Rob, con su consentimiento, por haber propinado una paliza —esta sí, brutal— a una mujer con la que mantenía relaciones.

Los hechos ocurrieron hace diez años pero se han conocido ahora, a raíz de una investigación por asesinato. Rob, el hombre que fue deshonrado por los zapatazos de sus compatriotas bangladesíes, se encuentra en prisión provisional como presunto autor de la muerte de otra mujer, Nlufa, desaparecida el pasado 7 de febrero en un des-

campado cercano a Santa Coloma. La mujer, de 37 años, dejó a sus cuatro hijas en un centro comercial y se reunió con Rob en una zona montañosa. En abril, los Mossos d'Esquadra localizaron su cadáver.

En 2004, Rob y Janu trabajaban en el mismo taller de confección. Se hicieron amigos y, con el tiempo, amantes. Un día, durante un paseo por la ribera del Besòs discutieron. Él le propinó una paliza que, según los investigadores, casi acaba con su vida. "Le vi la cara y estaba muy mal. Recibió un golpe tan fuerte que tenía un ojo morado y no lo pudo abrir en dos o tres meses. Tuvo mucho tiempo la cara morada", ha explicado Kowser, conocido de ambos, ante la juez que investiga la muerte de Nlufa.

Kowser no solo fue testigo de la agresión, sino también del castigo a Rob. La idea de pegarle zapatazos y zanjar el asunto sin más fue idea de un primo de la víctima. "El primo pidió que lo resolviera la comunidad islámica. Ella no quería que lo supiera



La fallecida Nlufa, en una foto familiar.

mucha gente por vergüenza y por su cultura", añadió Kowser en su declaración como testigo. "Fueron a la casa donde vivía Rob, para que él pidiera perdón.

Y luego, aparte, le dieron pequeños golpes con el cuerpo con un zapato. En nuestra cultura, pasar el zapato por el cuerpo, dando golpes leves, a un hombre, es muy vergonzoso", consta en esa misma declaración.

Nacido hace 47 años en Madaripur, en el centro de Bangladesh, Kowser ayuda a cargar unas cajas en una furgoneta que se detiene frente a la puerta del piso donde vive, en el barrio del Fondo, densamente poblado y con un alto porcentaje de inmigrantes. Kowser, que se considera a sí mismo "una persona muy respetada en la comunidad", defiende el castigo aplicado a Rob. "Tenemos nuestra forma de arreglar los asuntos, como los gitanos aquí en España. En Bangladesh,

la víctima puede elegir de qué forma se le compensa. Según el islam, esto se puede hacer", detalla bajo el sol de primera hora de la tarde en un castellano muy correcto.

En la comunidad bangladesí que vive en Santa Coloma no hay jerarquías, remarca Kowser. La aplicación de la ley islámica fue pactada por las dos familias, explica, lo que evitó que se presentara una denuncia en la policía o en los juzgados por la paliza a Janu. "Para nosotros, pegarle zapatazos es una humillación, es tan grave como 20 años de cárcel. Aquí todo el mundo sabe lo que ha pasado y es una vergüenza". Rob, añade, permaneció va-

Seis hombres golpearon con un zapato el cuerpo de su compatriota

rios días sin relacionarse con la comunidad; solo salía de casa para ir al trabajo. Fuentes policiales, en cambio, lamentan que el caso no se hubiese denunciado. No solo porque el hombre podría haber sido condenado, sino también porque los investigadores habrían estado más vigilantes para evitar nuevos ataques.

PASA A LA PÁGINA 4



María y sus dos hijas, en El Pou de la Figuera, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera de Barcelona. / CONSUELO BAUTISTA

Familias al límite

Las entidades calculan que hay 34.000 unidades con hijos y sin ingresos

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

Gracias a las vacaciones, El Pou de la Figuera, en el corazón del barrio barcelonés de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera, es un hervidero de niños estos días. Unos jóvenes latinos escuchan a Rubén Blades por un teléfono móvil mientras charlan y juegan con una pelota desinfla-

da: "Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás", dice la letra.

Este es el barrio donde María, de 37 años, vive con su esposo, de 44, y sus dos hijas de 7 y 12. El viernes, las niñas se fueron de colonias. La mujer, que trabaja por horas en una empresa de limpieza, las llevó hasta el Centro Abierto Tria, de la Funda-

ción Comtal, desde donde sale la excursión. Allí también hacen refuerzo escolar, reciben merienda y pasan tardes durante el curso. La suerte de la familia se torció hace cinco años cuando el marido perdió el empleo. Su experiencia en tela asfáltica ya no valía cuando estalló la burbuja del ladrillo. "Vamos tirando como podemos", confiesa la mujer.

Las cuentas no salen. Los 370 euros del piso, la comida, los imprevistos, la ropa... "Mi marido va a los cursos del servicio de ocupación pero no lo cogen, dicen que es mayor". Ahora él se encarga de las menores. Ella hace malabares con su salario y ha recibido ayudas sociales. Y en casa hacen llaveros para una empresa, cobrando en negro, cuen-

ta María mientras las niñas juegan. "Con lo de los llaveros sacamos unos 60 euros, para los extras, para ellas", dice y las mira.

No es un simple instinto materno. Los niños siguen siendo las principales víctimas de la crisis y el desempleo de los padres. La tasa de pobreza infantil en Cataluña es del 30%, pero el problema resulta casi invisible. Hace un par de meses, el sociólogo experto en pobreza Pau Mari-Klose recordaba en un encuentro organizado por Fedaiia, la federación de entidades de aten-

Los niños son la gran víctima de la crisis, un fenómeno casi invisible

ción a la infancia, cómo el CIS realizó una encuesta preguntando por el colectivo que estaba más en riesgo y se olvidó de incluir a los niños.

El desinterés contrasta con la cruzada de muchas instituciones y lo duro de las estadísticas. La semana pasada, las entidades del tercer sector ponían de nuevo el problema sobre la mesa. El informe Insocat de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) revelaba que el 15% de los niños catalanes viven en hogares donde ninguno de los padres tiene un empleo, un incremento de 11 puntos desde 2008. Hace pocos días La Cruz Roja también alertaba que en lo que iba del año se había disparado en un 37% la atención a los menores.

PASA A LA PÁGINA 3

El hospital de Reus acumula una deuda de 98 millones de euros

La justicia investiga la construcción del enorme e infrautilizado centro sanitario

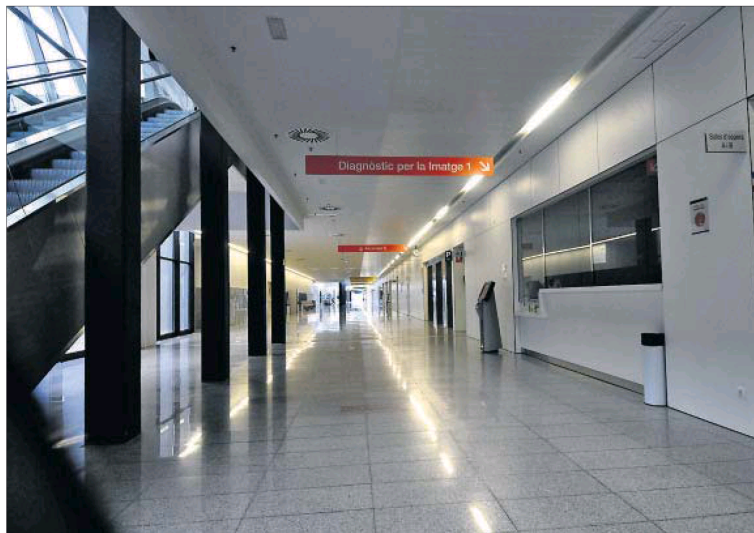
MERCÈ PÉREZ
Reus

Cerca del Tecnoparc, el parque tecnológico de Reus (Baix Camp), sobresale un enorme edificio. Es una mole de 92.000 metros cuadrados con seis alas y diseño rupturista plagado de oscuros ventanales. Un turista podría confundirlo con un palacio de congresos o un aeropuerto, sobrenombre por el que es conocido en la ciudad el Hospital Universitario Sant Joan.

En realidad es un centro sanitario de titularidad municipal en el que se invirtieron 170 millones de euros, según explicó el Ayuntamiento cuando fue inaugurado, en 2010. Alumbrado por el exalcalde, Lluís Miquel Pérez (PSC), el proyecto fue diseñado por los despachos Pich Aguilera y Corea Moran. Sin embargo, hoy funciona a medio gas y su construcción está siendo investigada por el juzgado de instrucción 3 de Reus dentro del caso Innova, en el que se escudriñan un reguero de presuntas ilegalidades cometidas en el seno de las empresas municipales.

El hospital ha comportado ya la imputación de Pérez por el pago de 387.000 euros al arquitecto Jorge Batesteza, por trabajos de supervisión que supuestamente no hizo. Batesteza fue jefe de Infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y los contratos en Reus se le adjudicaron a dedo, según el juez, desde 2007, tan solo un mes después de que abandonara el cargo en el CatSalut. Por este episodio el juez le ha impuesto a él y al expresidente del ICS, Josep Prat, y exdirector de Innova, una fianza a cada uno de un millón y medio de euros.

El exalcalde está acusado en el caso de prevaricación, malversación, blanqueo de capitales,



Uno de los largos y desérticos pasillos del nuevo hospital Sant Joan de Reus. / JOSEP LLUÍS SELLART

falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos. Las facturas suponen, para el juez, "una grosera falta de control del dinero público". Prat declaró que los consejeros delegados de Innova y la entonces consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, le ordenaron contratar a Batesteza.

El Ayuntamiento, al inicio de este mandato, tenía una deuda de 402 millones de euros, explicó el actual alcalde, Carles Pellicer (CiU). En el interior del hospital dominan los pasillos interminables y espaciosas salas de espera en las que sillas relictas languidecen a oscuras por estar cerradas. También están clausuradas más de una cuarentena de habitaciones. Reina el silencio y el vacío ya en la entrada del edificio, donde un sábado

de verano a media tarde no hay rastro de las más de 3.000 personas que el Consistorio estimaba que iban a acudir cada día al centro, un millón anuales.

Más allá de la recepción, ubicada en el medio de una rambra, entre tiendas de flores, regalos, prensa o una sala multiconfesional, incluso se alza un auditorio que sería la envidia de muchos municipios. El hospital tiene su origen a mediados del siglo XVIII, el Ayuntamiento se incorporó pronto a la gestión y no fue hasta 1980 cuando se convirtió en sociedad municipal y en universitario. El encargado de pilotar este proceso fue Prat.

En 2006, Innova adjudicó a Dragados y Agelectric la redacción del proyecto del nuevo hospital. Lo gestaron el CatSalut y el Ayuntamiento, a pesar de que

un informe del primero ya en 2006 habría alertado de su futuro sobredimensión, con "numerosos excesos" según diversas fuentes, y recomendando que fueran poco más de 60.000 los metros cuadrados a construir.

Cuando se inauguró, gobernaban tanto en el ejecutivo catalán como en el Consistorio un Tripartito formado por PSC, ERC e ICV. Acudieron Geli, el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla y el presidente del Parlament, Ernest Benach, que es de Reus. El equipamiento, que compite por la capitalidad sanitaria con el Hospital Joan XXIII de Tarragona, triplica en metros al anterior hospital, cuenta con 460 camas en total, 60 boxes de urgencias, y más de una decena de quirófanos. Incluso hay un "espacio museístico

dedicado a la memoria de la sanidad pública en Reus". Trabajan en él 1.070 personas. En 2011 se incorporaron robots para hacer de mensajeros en las entregas y recogidas del material de cocina, el almacén general, la farmacia y la lavandería. Se instalaron 8.000 kw de potencia eléctrica, el equivalente a lo que necesitarían 1.800 viviendas o un municipio de unos 5.000 habitantes.

Pero entre tanta grandilocuencia, la factura total del centro, a medias entre el CatSalut y el Consistorio, es un misterio y está casi toda por pagar. Según el Ayuntamiento, las obras costaron 129 millones de euros, de los que faltan por pagar 98,6. En cambio, según indicó Batesteza en la comisión de investigación de la sanidad catalana en el Par-

En el interior hay largos pasillos y espaciosas salas de espera cerradas

La potencia instalada daría luz a un municipio de 5.000 habitantes

lament, las obras se adjudicaron por 70 millones de euros pero acabaron costando 131, mientras que Pérez en la misma comisión cifró la factura en 180.

El anterior gobierno local contó con vender los terrenos del antiguo hospital para sufragar los créditos, pero siguen sin comprador. Además puso como prenda a los bancos el concierto con el CatSalut, que aporta anualmente al hospital más de 100 millones de euros. Pérez pignoró estos ingresos en caso de no poder hacer frente a los pagos del crédito, como está ocurriendo. Una "chupuza", según Pellicer. Y en enero se descubrió que el ayuntamiento sopesaba atraer a pacientes de Nigeria, Canadá o Israel por la vía privada, o alquilar espacios. Todo para salir del entuerto.

Los recortes en ayudas están afectando más a los niños, afirman los expertos

VIENE DE LA PÁGINA 1

A las voces del tercer sector también se sumaron las del mundo educativo. "La pobreza infantil es una autopista al fracaso escolar", denunció Alex Castillo, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (Fapac). La Mesa del Tercer Sector, usando los datos de la EPA, calcula que en Cataluña hay 34.000 familias sin ingresos con niños o dependientes a cargo y pidió para ellos una prestación nueva, de 465 euros: la cifra saldría de la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) más un plus por un menor a cargo. La paga, dicen desde la Mesa, es una medida de urgencia y alternativa a la RMI, que está a la espera de una reforma

por parte de la Generalitat. El Ejecutivo de Artur Mas se comprometió a estudiar la idea.

El 38% de la población Sant Pere, Santa Catalina y La Ribera es inmigrante, el 12% tiene menos de 18 años. En junio, de los 1.736 desempleados del barrio, 784 llevaban más de 12 meses en paro. "Antes nos encontrábamos con el problema de falta de preparación o de trabajo precario, pero siempre había esperanzas. La dureza de la crisis ahora acaba hasta con ello", explica Aina García, de Comtal. La entidad busca más financiación, además de la pública, y orienta sus programas también a la atención psicológica de las familias. El centro abierto atendió en 2013 a 210 niños de 14 nacionalidades.

La familia de María aún tiene una malla de protección bajo sus malabarismos para llegar a fin de mes. Su suegra, que a veces pone la comida en la mesa; la escuela; Comtal; la leche que consigue en un banco de alimentos... Sin embargo, manifiesta que vive una gran zozobra. Un túnel en el que cuesta ver la salida. "Hay una mejora en las cifras de empleo, pero sigue siendo precario y desigual. Surge una nueva clase con muchas menos posibilidades y los menores son los más débiles", asegura la socióloga Cristina Valls, autora del Insocat.

El problema de fondo sigue siendo cómo no dejar que los menores caigan en exclusión. "La gran asignatura es que la

defensa de los derechos de la infancia es que no se apoye exclusivamente en la defensa de la dignidad", cree Mari-Klose, que denuncia que en los momentos de vacas gordas tampoco se ha invertido en infancia, como sí ha sucedido en Reino Unido.

De hecho, en los últimos tres años, se ha reducido la inversión en el Estado un 15%, según datos de Unicef. Cataluña y otras comunidades resultaron muy afectadas en el reparto que el Ministerio de Sanidad hizo del último fondo extraordinario para la pobreza, pues no tuvo en cuenta la población (2,5 euros por niño, frente a los 130 euros de Melilla). El jueves, el Parlament aprobó una moción

para que dentro de seis años se invierta un 2,2% del PIB catalán en políticas para los menores.

Valls pone el acento en el poco impacto positivo que tienen las transferencias sociales en la pobreza infantil. En 2012, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa de riesgo de pobreza baja en promedio 24,7 puntos después de que se desembolsan los recursos del sistema de protección social. En el caso de los menores de 16 años, esta reducción es solo de 8,3 puntos. "Esto demuestra que los recortes en ayudas están afectando mucho más a los niños", explica la socióloga. "Un combate decidido de la pobreza, con políticas concretas y dinero, permite más productividad y un ahorro en otros gastos como sanidad o seguridad", agrega Mari-Klose.

María vuelve a mirar a las niñas. Las deja en el *casal* y ellas parten a su semana en Vilafranca del Penedès. Ella coge su bolso y se va a trabajar.